

RIT	: O-6790-2019
RUC	: 19-4-0221977-K
MATERIA	: INDEMNIZACION PERJUICIOS POR ACCIDENTE DEL TRABAJO
DEMANDANTE	: JORGE AQUILES ARAYA INOSTROZA
Cedula de Identidad	: 7.603.968-2
ABOGADO PATROCINANTE	: Daniel Toro Alcayaga
DEMANDADO	: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM)
PROCEDIMIENTO	: ORDINARIO DE APLICACIÓN GENERAL

Santiago, a catorce de junio dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Daniel Alejandro Toro Alcayaga abogado, en representación convencional de don JORGE AQUILES ARAYA INOSTROZA, funcionario administrativo, domiciliado en Avenida Las Higueras N° 3678 Comuna de La Florida, Santiago, interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente laboral en procedimiento de aplicación general en contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA persona jurídica del giro educacional, representada legalmente por don LUIS PINTO FAVERCO, ambos domiciliados en Calle 18 N° 161 Comuna de Santiago y con faenas o servicios en calle Coronel Pantoja N° 128 comuna de Santiago, por los hechos que expone.

Indica el demandante se desempeña en el cargo de administrativo titular desde el 1° de septiembre de 1982, encasillado a partir del decreto N° 383 de 1997 en el grado 12 de la planta de administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Luego, en virtud de resolución exenta N° 2715 de fecha 7 de agosto de 2013 se le destinó a cumplir funciones al Departamento de Humanidades, en grado 18 de la escala de remuneraciones de la Universidad. La duración del nombramiento era y es de carácter indefinida. Las funciones que desempeñaba eran variadas, desde preparar equipos en salas, preocuparse de que las mismas se mantuvieran aseadas, realizar mantenciones de equipos y solución de problemas eléctricos menores como enchufes, preocuparse de las filtraciones de techo, entre otras, hasta incluso prestar apoyo en salas de clases para las pruebas. Indica que si bien las labores que realizaba habitualmente eran las de administrativo en sala de clases y laboratorios, tales funciones jamás fueron definidas formalmente, realizando en la práctica, un sinnúmero de labores de colaboración para el correcto funcionamiento del establecimiento en el que prestaba sus servicios a petición de sus jefaturas, so pena de malas calificaciones, elemento de medición utilizado por la demandada para el control de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la carrera funcionaria.

La jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales se distribuía de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas, con 40 minutos destinados a colación y no imputables a la jornada de trabajo.



La remuneración convenida, está compuesta por un sueldo base de \$704.507.- además de una asignación de antigüedad de \$169.082, razón por la cual la remuneración mensual bruta alcanza la suma de \$873.589.

Expresa que el martes 31 de mayo de 2016, el demandante se encontraba realizando sus funciones en dependencias de la demandada, específicamente en la sede ubicada en calle Coronel Pantoja N° 128 comuna de Santiago, y llegó don Javier Antonio Ceballos Godoy, quien presta servicios a honorarios para la demandada, enviado por su jefatura directa, don Héctor Vega, para realizar trabajos de reparación de goteras en el techo de dicho establecimiento, sin embargo, dicho maestro desconocía la ubicación exacta de las goteras que debía reparar, siendo el actor la única persona presente en el lugar que conocía cabalmente las mismas. Por ello acompañó a don Javier Ceballos, subiendo al techo indicándole con precisión donde debía realizar las reparaciones. Mientras realizaba dicha labor, pisó sobre una plancha de fibra de vidrio, la cual cede, cayendo violentamente al piso desde una altura de 5,37 metros medidos en el lugar por un funcionario fiscalizador de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Indica que la demandada jamás adoptó respecto del demandante ninguna medida de seguridad, tendiente a informar adecuadamente los riesgos a los que se encontraba expuesto en el lugar de trabajo, al no entregar copia del reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad al actor, ni realizar charlas del derecho a saber, entre otras, lo que supone flagrantes infracciones a normas específicas en materia de higiene y seguridad.

En el lugar del accidente se constituyó en primera instancia la Seremi de Salud de la Región Metropolitana quien constató una serie de incumplimientos en materia de Higiene y Seguridad respecto del accidente del demandante y que propiciaron la ocurrencia del mismo: no contar con procedimiento de trabajo seguro para mantención de techumbres; no contar con registro de capacitaciones del proceso antes señalado a los trabajadores que realizan estas labores; Falta de control por parte de la Universidad, por existir lugares de acceso a techumbre abiertos para el ingreso de cualquier persona; Falta de supervisión directa al momento de realizar la tarea, al no advertir los riesgos a los cuales el trabajador se encontraba expuesto al momento de subir a techumbre sin ningún elemento de protección personal y por un lugar habilitado solo para capacitado.

Dicho procedimiento sanitario terminó con una multa a beneficio fiscal por 80 Unidades Tributarias Mensuales, en virtud de resolución exenta N° 122 de fecha 17 de enero de 2017

Luego, se realizó la respectiva fiscalización la Inspección del Trabajo, a la que se le asignó el N° de comisión 1301/2016/2513 y en cuyo informe de exposición concluye que: “Según la documentación revisada y teniendo en cuenta la documentación inexistente respecto del trabajador accidentado, se define que la causa principal es la falta de conocimiento sobre prevención de riesgos e inducción al respecto, ya que, la empresa o institución no le da a conocer algún



reglamento interno, el cual se supone debe contener aspectos básicos sobre los riesgos del lugar de trabajo y además no efectúan alguna inducción dándole a conocer los riesgos insertos en su labor; lo que ayuda a que el trabajador tome conciencia respecto de su seguridad”

En razón de la referida fiscalización, la demandada fue sancionada administrativamente con dos multas a beneficio fiscal por 60 Unidades Tributarias Mensuales cada una de ellas, la primera, por no confeccionar reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y la segunda, por no informar al trabajador los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto de los elementos y productos que deban utilizar en los procesos productivos o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos y las medidas de control.

Producto de la caída, el actor resultó con graves lesiones: politraumatismo grave, fractura de pelvis, fractura de húmero derecho, infección urinaria, fracturas costales y transversas lumbares bajas y trauma abdominal cerrado. Se indica que fue sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas: Con fecha 31 de mayo de 2016 se realizó aseo quirúrgico, reducción e instalación de fijador externo en codo derecho; Con fecha 3 de junio de 2016 se le realizó reducción y osteosíntesis por fractura de pelvis y el 2 de agosto de 2016 se le realizó reducción y osteosíntesis por mala unión de húmero con triple placa y trasposición de nervio cubital.

Se afirma que sin perjuicio que el día 9 de agosto de 2016 fue dado de alta hospitalaria, trasladándose su domicilio y continuando con controles y tratamiento médico ambulatorio, ello no estuvo exento de complicaciones, debido a la gravedad de sus lesiones. En tal sentido, el día 30 de agosto de 2016 fue nuevamente hospitalizado por presentar aumento de volumen a nivel del codo derecho, recibiendo antibioterapia. En octubre de 2016 nuevamente es hospitalizado para observación de artritis séptica de codo derecho. Se mantuvo con tratamiento antibiótico y fue dado de alta hospitalaria el día 11 de octubre de 2016. Luego, continuó con kinesioterapia y terapia ocupacional sin lograr mayores avances. En el mes de mayo de 2017 ingresó nuevamente a hospitalización, realizándose retiro de osteosíntesis, aseo quirúrgico y fijación externa, instalándosele, finalmente, una prótesis en el codo derecho. Se agrega que debido a las lesiones sufridas, el actor fue diagnosticado con una hipoacusia sensorio neural post traumática. En ese sentido la demandante señala que luego de más de un año de ocurrido el accidente, continuaba con kinesioterapia y terapia ocupacional y con controles en traumatología fisiatría, y fue derivado a la Comisión de Evaluación de Incapacidad por Accidentes del Trabajo (CEIAT) quien en virtud de resolución N° 20190479 de fecha 28 de marzo de 2019 determinó que el actor padece de una incapacidad laboral de un 80%.

Las secuelas sufridas por el actor que se indican en dicha resolución son resección articular prótesis codo, limitación de movilidad hombro y codo. Dolor crónico e Hipoacusia sensorio neural mixta.



Se agrega que el 18 de julio de 2018 el actor fue diagnosticado por el Psiquiatra de la Mutual de Seguridad, don Matías Enrique Yáñez, con un trastorno adaptativo con síntomas depresivos, recetándole SERTRALINA 100 MG DULOXETINA 30 MG ESZOPICLONA 3 MG. Todo lo anterior, debido a la intensa afectación a su integridad psíquica producto del accidente.

La demandante afirma que el accidente obedece a un grave incumplimiento de la demandada a su obligación de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo y normas complementarias como el artículo 36; 37 y 53 del Decreto Supremo N° 594. Cita doctrina.

En cuanto a los daños sufridos, señala se señala que el trabajador padeció politraumatismo grave, fractura de pelvis, fractura de húmero derecho, infección urinaria, fracturas costales y transversas lumbares bajas y trauma abdominal cerrado. Por otra parte, las secuelas del accidente se han extendido al plano de su salud mental, siendo afectado por un cuadro depresivo secundario a su deterioro físico. Los primeros días en su domicilio, luego del alta médica, se demostró antisocial, irascible, apático y no tenía ganas de ser visitado por ningún familiar o amistad. Ha sufrido dolor y frustración durante todo el periodo posterior al accidente y se ha convertido en una persona con una evidente discapacidad la que se traduce en un 80% de conformidad a resolución dictada por la CEIAT.

Se agrega que dado su estado físico y mental y las secuelas permanentes derivadas de su lesión, tiene un trastorno depresivo secundario a su deterioro físico. Se hace referencia a las atenciones de psiquiatría para corroborar los asertos anteriores. Se afirma que el actor al verse privado de su capacidad de trabajar y de realizar actividades que antes realizaba con normalidad, como jugar fútbol, tomar peso, entre otras experimenta un constante desánimo siendo evidente que es víctima de un perjuicio de sufrimiento. Además, se indica que también ha sido víctima de un perjuicio de agrado, pues es poco probable que atendida la naturaleza y entidad de la lesión sufrida, pueda rehabilitarse plenamente, tiene una pérdida permanente, de su capacidad normal de trabajo y, por consiguiente, de generar ingresos, debiendo dejar de lado por todo este periodo, y posiblemente para siempre los entretenimientos comunes y ordinarios que formaban parte de su estilo y proyecto de vida, afectándose intensamente su salud mental.

Se hace referencia exhaustiva a la normativa legal aplicable al caso, y se cita la “Declaración Prevencia” de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, suscrita en Santiago de Chile, el 03 de abril del año 2009, donde se señala “el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social es consustancial a la prevención de riesgos laborales, y su protección y promoción determinan un objetivo de primer orden para los Gobiernos, los Interlocutores Sociales y la sociedad en su conjunto”.

Solicita en consecuencia, que se acoja la demanda y se condene a la universidad demandada al pago de una indemnización por el daño moral sufrido por la suma de \$250.000.000



o la cifra superior o inferior que determine el tribunal, con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

SEGUNDO: La empresa demandada Universidad Tecnológica Metropolitana, representada por el abogado Pablo Ignacio Cañon Thomas, ambos domiciliados en calle Dieciocho N° 161, comuna de Santiago, Región Metropolitana, contesta la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional interpuesta y solicita su rechazo en todas sus partes con costas. Señala que si bien no es correcto afirmar que existe una relación laboral, puesto que dicha nomenclatura se utiliza típicamente para las relaciones entre trabajadores y empleadores que se rigen por el Código del Trabajo –lo que no acontece en este caso–, reconoce que el Sr. Araya tiene la calidad de funcionario público y presta servicios en la Universidad Tecnológica Metropolitana hasta el día de hoy. Señala que el actor ingresó a esa repartición pública en el año 1982 cuando se conocía como Instituto Profesional de Santiago. Más tarde, cuando paso a ser Universidad Tecnológica Metropolitana, se crearon las plantas y con ello se inició el proceso de encasillamiento. El encasillamiento se realizó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes del Estatuto Administrativo. Este proceso se formalizó en el Decreto 105 de 1996 donde se reguló la asignación de cargos en la planta y los respectivos grados según cada funcionario. En el caso del Sr. Araya, fue encasillado en la planta administrativa mediante Decreto 383 de 1997, sin embargo expresan que se encuentra en el grado 18 y no 12 como indica la demanda, lo que es relevante ya que la descripción de los cargos asociados al grado que posee el Sr. Araya señala: “Función de Mayordomo y Portería: Les corresponde realizar labores de coordinación, supervisión y control de un sector físico determinado, cautelando su resguardo y mantenimiento” (Decreto 105 de 1996). Así, señala que existe una total coincidencia entre lo que formalmente se encuentra descrito en los instrumentos públicos y las funciones que en los hechos desempeñaba el Sr. Araya, a saber: encargado de laboratorio de inglés. Por consiguiente, carece de sustento fáctico y jurídico la afirmación del actor en orden a señalar que sus funciones jamás fueron definidas formalmente. Indica que existe una descripción de funciones que abarca las labores de mantenimiento y reparaciones (como es el caso de las techumbres) de las que se encargan los funcionarios de la planta auxiliar. En el caso de marras, el Sr. Ceballos pertenece a dicho grupo de funcionarios y la descripción formal de estas labores se encuentra también en el Decreto 105 que refiere: “Función de Artesano y Función de Chofer: Les corresponderá realizar labores de reparación, mantención, trabajos menores y otras labores análogas que la Institución requiera”. De esta manera, los riesgos que entrañan las actividades desarrolladas por los auxiliares, difieren de los riesgos a los que pueda estar expuesto un administrativo. Expresa que las capacitaciones que alega el demandante, no resultan determinantes, puesto que se circunscriben a las labores que desempeña cada trabajador, en razón de la función asignada. Por otro lado, respecto a la probable amenaza que



desliza el demandante en torno a las “calificaciones” rechaza tal afirmación, y señala que se trata de un procedimiento reglado por la ley.

Precisa que nuestra legislación contempla un sistema de seguro social obligatorio para efectos de proteger a los trabajadores y sus familias de los riesgos de los accidentes del trabajo y de enfermedad profesional. Dicho sistema se tiene su fundamento primordial en otorgar a los beneficiarios, las prestaciones necesarias para cubrir los costos derivados de un eventual siniestro con ocasión del trabajo, sin tener que recurrir para ello a probar los elementos que configuran la responsabilidad civil. Conforme a la ley N° 16.744 basta determinar si el siniestro puede ser catalogado como accidente de trabajo de acuerdo a la definición del concepto que entrega la propia ley, prescindiendo de calificaciones subjetivas como la determinación de la culpa del agente causante del daño. El artículo 5° de la citada ley especial ha definido accidente del trabajo como “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.” De esta forma, bastará probar el nexo causal entre el daño y la actividad laboral, para tener derecho a la cobertura de las prestaciones que se encuentran en la ley: Prestaciones médicas: comprensivas de la atención quirúrgica y dental; de la hospitalización; de los medicamentos y productos farmacéuticos; de prótesis y 3 productos ortopédicos; de la rehabilitación y reeducación profesional; y de los gastos de traslado necesarios para realizar esas prestaciones. Prestaciones por incapacidad temporal y Prestaciones por invalidez. Señala que no es controvertido que el demandante sufrió un accidente con ocasión del trabajo, toda vez que se encontraba en un recinto perteneciente a la institución empleadora, dentro de la jornada laboral. Por dichos motivos, una vez constatado el hecho del accidente, se procedió a dar aviso a la institución previsional correspondiente para activar la cobertura del seguro, con el fin de que el funcionario afectado tuviera acceso a las prestaciones garantizadas. Con todo, refiere que el hecho que haya operado el seguro obligatorio para cubrir los daños derivados del accidente sufrido por el demandante, no implica necesariamente que se configure la responsabilidad civil de la universidad. Lo anterior, debido a que, a diferencia de otras legislaciones en donde el establecimiento de un sistema de seguro obligatorio va aparejado con la supresión del régimen general de responsabilidad civil, en nuestra legislación coexisten ambos estatutos. Lo anterior se ve reflejado en el artículo 69 de la ley especial sobre la materia, el cual dispone expresamente; “Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.” Agrega que si bien el citado artículo 69



otorga a la víctima y terceros afectados, la posibilidad de solicitar indemnizaciones adicionales a las cubiertas por el seguro obligatorio, dicha pretensión debe ser fundamentada en base a las normas de generales de Derecho, sin que baste probar el daño sufrido con ocasión del trabajo, sino que además, la culpa o dolo y el nexo de causalidad entre estos. No se puede limitar el análisis a establecer que concurrieron los hechos para que opere el seguro obligatorio, toda vez que éste opera bajo un estatuto propio, distinto al de las normas civiles generales.

Señala que el incumplimiento que denuncia el demandante se circunscribe a 2 puntos esenciales: la falta de reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y la falta de capacitación del trabajador de los riesgos que entraña su labor. Afirma que esta obligación se encuentra contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Agrega que inclusive la UTEM fue multada en dos ocasiones producto de esta falta administrativa y cita al efecto parte de los expedientes llevados por la SEREMI de Salud y la Inspección del Trabajo. Por consiguiente, el incumplimiento en términos del análisis de la responsabilidad civil del caso en cuestión se encuentra determinado por el artículo 184 y concretamente en la falta de reglamento de orden, higiene y seguridad, además de la ausencia de capacitaciones al Sr. Araya sobre los riesgos que entrañaban sus labores. Indica que para determinar la responsabilidad civil bajo el régimen común como lo establece el artículo 69 de la Ley 16.744, es relevante lo consignado por el propio demandante en su presentación de lo que desprende en su concepto, la plena conciencia de su calidad de administrativo (menciona al efecto decretos y una resolución exenta de 2013 mediante la cual el actor fue destinado al Departamento de Humanidades, para encargarse del “Laboratorio de Inglés”. Dicho espacio físico, debía ser coordinado para su uso, supervisado y en efecto mantenido en orden por el funcionario para los servicios estudiantiles que se prestan a diario en la institución. Cabe indicar que al ser un espacio en donde se desarrollan actividades más bien lectivas, las labores desarrolladas eran administrativas, de apoyo a la docencia (instalar computadores, coordinar actividades lectivas, uso de las dependencias, etc.) EL superior jerárquico del Sr. Araya, en este caso el Director del Departamento de Humanidades, a la época de los hechos era doña. Carmen Gloria Hadermann Bofill. En Segundo término la intención del demandante era indicar la ubicación de las goteras a un trabajador cuya misión era la reparación de las mismas, y adicionalmente dada su condición de administrativo, es lógico que no conocía los riesgos de un trabajo en altura, pues ese tipo de labores no corresponden a aquellas que desarrollaba diariamente en su lugar de trabajo sino que, como hemos mencionado anteriormente, al personal especializado perteneciente a la planta auxiliar como es el caso del Sr. Ceballos. Así, se indica que el trabajador decide de buena fe, en un acto voluntario, libre de todo vicio y sin mediar instrucción alguna ni tampoco acto administrativo que así lo dispusiera, indica las goteras por segunda vez, pero ahora mediante una acción temeraria que termina con el desenlace ya conocido.



Refiere que conforme al propio relato del actor se desprende que no existía un libre acceso a la techumbre, y la indicación de las goteras ya había sido hecha a ras de suelo en condiciones de bajo riesgo. En cuanto a la Relación de Causalidad y métodos correctos de trabajo, Afirma que la conducta desplegada por el funcionario no se encuentra asociada a sus labores habituales de corte administrativo. Adicionalmente la relación de causalidad entre el evento dañoso y la falta administrativa no se configura, siendo necesaria su prueba en atención a la manera en que se desarrollaron los hechos.

TERCERO: Que el 30 de enero de 2019, se realiza la audiencia preparatoria y llamadas las partes a conciliación esta no se produce.

Se establecieron como **hechos no controvertidos** los siguientes:

1. Que el demandante ingreso a prestar servicios en calidad de funcionario público el día 01 de septiembre de 1982 en la Universidad Tecnológica Metropolitana;
2. Que el día **31 de mayo de 2016** el demandante sufrió un accidente de carácter laboral dentro de las dependencias de la Universidad ubicada en Coronel Pantoja N°128, comuna de Santiago.

Se establecieron como **hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos** los siguientes:

1. Causa, forma y circunstancias en la que ocurrió el accidente sufrido por el demandante el día 31 de mayo de 2016;
2. Función y cargo del actor;
3. Efectividad que la demandada tomó todas las medidas de seguridad para el resguardo de la salud y la vida del demandante;
4. Efectividad de haber sufrido el actor algún tipo de daño como consecuencia del accidente sufrido el 31 de mayo de 2016. En caso afirmativo naturaleza, entidad y monto de los mismos.

CUARTO: La parte demandante incorpora como **prueba documental**:

1. Copia Decreto N° 383 de fecha 14 de agosto de 1997 emanado de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
2. Resolución Exenta N° 2715 de fecha 7 de agosto de 2013 de la Universidad Tecnológica Metropolitana
3. Certificado de fecha 12 de agosto de 2018 emanado de la Universidad Tecnológica Metropolitana
4. Epicrisis Hospitalaria del demandante en la Mutual de Seguridad
5. Informe Médico del demandante emanado de la Mutual de Seguridad con fecha 31 de julio de 2019.



6. Denuncia Individual de Accidente del Trabajo efectuada por el trabajador con fecha 31 de mayo de 2016

7. Ordinario N° 482 de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota por la cual entrega información y que contiene carátula de informe de fiscalización N°1301/2016/2513 y el respectivo formulario para la fiscalización e investigación de accidentes del trabajo

8. Copia de Sumario Sanitario expediente N°2936 del año 2016 efectuado por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y que contiene resolución exenta N° 122 dictada por dicho organismo

9. Resolución de Incapacidad Permanente Ley 16.744 N° de resolución 20190479 de fecha 28 de marzo de 2019

Se rinde la siguiente prueba **Testimonial**:

1.- Miriam Ruth Márquez Neira, quien es cónyuge del demandante señala que están casados hace 41 años y sabe que la empresa demandada es la universidad. Expresa que el 30 de mayo del 2016 su marido sufrió un accidente. Desde el punto de vista emocional se encuentra muy mal por su problema físico, ya que no puede hacer las mismas cosas, está limitado por la prótesis y se encuentra muy deprimido. mantiene tratamiento con psiquiatra y todo esto los ha afectado como familia, ya que no tiene ganas de nada. Todo le hace le parece mal, se frustra. Explica que antes estaba acostumbrado a hacer todas las cosas solo, por ejemplo nunca le planchó o le lavó la ropa, Jorge lo hacía, ahora ella le hace las cosas. Ha sido muy complicado como familia en la vida cotidiana tiene que ayudarlo a bañarse ya tiene que tener el brazo pegado al cuerpo por la prótesis tiene que ponerle la polera, lustrarle los zapatos. Antes era muy independiente, le gustaba maestrear, hacer arreglos poner el balón del Balón de gas que antes lo hacía él, de ahora lo hace ella. Señala que cuando terminó la licencia volvió a trabajar, no recuerda cuánto tiempo estuvo pero, 'pero fue casi el año con las rehabilitaciones y operaciones señala que no puede hacer fuerza. Llega a la Universidad a las 8 de la mañana prepara la sala, con los computadores encendidos y atender a los alumnos. Señala que se transporta en auto, está autorizado para manejar.

2.- Jorge Araya Márquez señala que el denunciante es su papá y la demandada es la UTEM para la cual también prestó servicios. No recuerda la fecha exacta en que su papá sufrió el accidente, pero fue en el 2016. Indica que ve a su padre frecuentemente, dos a tres veces a la semana. Emocionalmente se encuentra bastante afectado, perdió todo sentido de las aspiraciones pasa todo el día sentado, se siente inútil y le cuesta desde tomar un lápiz o un martillo. Tiene una prótesis en su brazo y un codo el doble de lo normal. No puede amarrarse los cordones y un tiempo estuvo con dificultades para vestirse. Los doctores le dijeron que no podía levantar mucho peso. Añade que su padre era bueno para hacer las cosas en la casa, lavaba, planchaba su ropa,



etc. Después del accidente volvió a trabajar en la universidad. Es el encargado de laboratorio y señala que va en auto o de repente locomoción colectiva o él lo pasa a buscar, puede manejar tramos cortos.

Exhibición de documentos:

1) Copia de decreto de nombramiento del demandante en el cargo y resoluciones complementarias.

2) Perfil de cargo del demandante o descripción de funciones con constancia de entrega al actor y suscrito por este.

3) Copia reglamento interno de orden higiene y seguridad con su constancia de entrega al actor y suscrito por este. Se solicita apercibimiento legal por la demandante ya que se solicitó el reglamento existente antes de la fecha del accidente, y el que se acompaña es posterior, además no consta fecha de entrega.

4) Copia de informe del accidente del Trabajo efectuado por el Comité Paritario de orden Higiene y Seguridad o Comité Paritario de Faena en su caso.-

Se incorporan **Oficios:**

1) Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, recibió denuncia del accidente del trabajo grave sufrido por el actor y en caso de ser efectivo, que remita copia de la misma, y del informe de fiscalización y exposición efectuado, y especialmente la Fiscalización e investigación de accidente del Trabajo N°1301/2016/2513

2) Secretaria Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana, si recibió denuncia del accidente del trabajo sufrido por el demandante y en caso de ser efectivo, que remita copia de la misma y del informe de fiscalización efectuado y especialmente del expediente N°2936 del año 2016 y de la resolución exenta N°122 de fecha 17 de enero de 2017. 3

3) Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción a fin de que remita a este Tribunal lo siguiente: 1.- La ficha clínica del demandante 2.- La denuncia individual de accidente del Trabajo 3.- Informe técnico o informe de investigación del Accidente del Trabajo Materia de estos autos, realizado por dicho organismo administrador. Y, además, informe de manera precisa lo siguiente: a) El diagnóstico, tratamiento, pronóstico y periodo de recuperación del demandante.- b) Tiempo de hospitalización, e intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometido el demandante, c) Periodo en que el demandante ha hecho uso de licencia médica como consecuencia del accidente de autos.- d) Si el demandante posee actualmente un porcentaje de incapacidad laboral determinado por dicho organismo y en caso de ser efectivo, que remita la resolución correspondiente



QUINTO: Declara el perito **Juan Omar Quintana Navea** quien señala que es perito judicial desde el año 2015. Refiere que evaluó en tres ocasiones al demandante Jorge Araya Inostroza y los 2 puntos relevantes a analizar fueron el daño moral y psicológico sufrido. Afirma que el actor tiene indicadores de grave daño psicológico, hubo cambios en su personalidad y en su funcionamiento. Menciona los tests que se le hicieron y refiere que se logró establecer que tenía una depresión grave, tuvo una puntuación alta en este aspecto, asimismo presentaba signos de trastorno por estrés postraumático. Afirma que los resultados y mecanismos de análisis utilizados son aceptados en la comunidad científica por la asociación psicológica americana. Explica que la depresión genera un cambio en el organismo para enfrentar el mundo, la persona se siente inútil desde una imagen introyectada. Precisa que el trastorno por estrés postraumático no necesariamente es incompatible con la depresión. En cuanto al pronóstico, señala que es difícil establecerlo, ya que a menos que haya verdadero trabajo psicológico donde el trabajador pueda re-significar las consecuencias del accidente sufrido, podría mantenerse igual como está. Requiere un proceso psicológico y psiquiátrico y terapia ocupacional. Al ser consultado señala que el peritaje lo realizó por zoom, en tres entrevistas al actor, y que ello depende del entrevistado. Puede existir una adaptación adecuada y eso pasó con don Jorge Araya, respondió bien a esta modalidad. Señala que existe apoyo familiar pero la actitud del demandante hace que ese apoyo se vea afectado ya que genera estrés a las mismas personas que lo están cuidando. Indica que leyó el informe emitido por la mutual elaborado por profesionales de la medicina y psiquiatría y establecía una discapacidad del 80%. Refiere que el actor estaba con controles psicológicos y psiquiátrico. Desde su apreciación psicológica afirma que puede haber afectación del ánimo y calidad de vida permanente en el demandante. Finalmente señala que es el primer peritaje que realiza en el ámbito laboral.

SEXTO: La parte demandada ofreció y rindió la siguiente **prueba documental**:

1. Certificados de Indicadores de Riesgo emitido por Mutual de Seguridad, periodo 2011 a 2013, 2014 a 2016 y 2017 a 2019.
2. Decreto Universitario N° 105 que fija la planta la UTEM.
3. Decreto Universitario N° 383.
4. Resolución Exenta N° 02715 de 2013.
5. Informe de Investigación de Accidentes elaborado por el Comité Paritario
6. Dos fotografías del Edificio donde funciona y una del lugar donde ocurrió el accidente.

Absuelve posiciones el demandante don **Jorge Aquiles Araya Inostroza**, quien señala que trabaja en la UTEM desde 1981 como auxiliar, después pasó a desempeñarse como encargado de laboratorio computacional desde hace como 25 años Cuando ocurrió el accidente



trabajaba en Pantoja con posterior al accidente siguió trabajando en el mismo lugar sus labores tenía que ver con la mantención de equipos, Data show, instalarlos en las salas, tenía a su cargo todas las sedes ver cómo funcionaban y resolver los problemas servicios mantenciones nunca lo hicieron oficial, señala que jamás le dijeron existía cargo de encargado de campus pero nunca se lo dijeron no sabía decir quién es el encargado, en la sede suya él era el encargado y su jefe directo era Carolina, reconoce que no recibió alguna orden del jefe directo para subirse al techo dice que Tendría que haber sido servicios generales los encargados de reparación del techo, pero él acompañó al funcionario para mostrarle el lugar.

Declaran previo juramento o promesa de rigor los siguientes **testigos**:

1. **José Liborio Urbano Peralta**, señala que sabe que está citado en representación de la UTEM y como director de desarrollo gestión de personas tienen un decreto 105 de 1996 que estableció las plantas directivas profesores técnicos administrativos auxiliar de la institución señala que Jorge araña es funcionario de planta administrativo el decreto 105 señala que es administrativo grado 18.

2. **Carmen Gloria Geiderman Bofill** señala que ingreso 1983 en el instituto profesional de Santiago actualmente directora del departamento humanidades, el actor estaba a cargo del departamento de laboratorio en Calle Coronel Pantoja es un cargo administrativo recibía á los docente y estudiantes, tenía que actualizar antivirus. Ella estaba en Antofagasta cuando fue el accidente. Después de mucho tiempo se contrató a un técnico en laboratorio que es Gabriel Veloso y está a cargo de los laboratorios hasta la fecha. Sabe que el accidente que fue en calle Pantoja cree que fue atrás donde hay un techo pero no sabe no sabe exactamente de donde se cayó el funcionario, el lugar del accidente estaba al lado del departamento de inglés.

3. **Natalia Santana Carmona** sabe que está citada por un accidente que hubo en la universidad un tiempo atrás trabaja y la unidad la unidad de humanidades y la parte el comité paritario fue informada de la situación fue al sitio del suceso y se constituyen con comité paritario y hacen entrevista a las personas involucradas hacen un informe del accidente y en la reunión se hizo la conclusión, hicieron una investigación se dieron cuenta que don Jorge que era auxiliar de laboratorio tiene su puesto está en el primer piso y surge la pregunta de qué hacía en el techo y hay una parte donde se debe ver si existe relación entre reglamento interno de higiene y seguridad y la descripción de funciones específicas no había no había, no era culpa inexcusable del trabajador si bien Se subió al techo por eso hicieron esa salvedad. Posteriormente se formalizó un reglamento interno de higiene y seguridad y otras cosas. Cuando es consultada de Si considera que actúa dentro de sus funciones señala que no. No recuerda las mejoras que sugirieron o lo que sucedió en el comité paritario después del accidente.

SEPTIMO: Que es un hecho pacífico don Jorge Araya Inostroza comenzó a prestar servicios para la universidad Tecnológica Metropolitana el 01 de septiembre de 1982. Por otra



parte, no ha existido mayor controversia en relación a la existencia del accidente sufrido por el actor el día 31 de mayo de 2016 en dependencias de la Universidad Tecnológica Metropolitana ubicada en calle Coronel Pantoja N° 128, comuna de Santiago.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la controversia se ha centrado en determinar si el accidente se produjo con motivo del incumplimiento de parte de la universidad demandada de su obligación de adoptar medidas de seguridad o si se debió a un acto de imprudencia temeraria de parte del actor. Asimismo debe establecerse el daño causado a la demandante y el monto de los perjuicios sufridos y si el actor sufrió algún tipo de daño como consecuencia del accidente acaecido el 31 de mayo de 2016. En caso afirmativo naturaleza, entidad y monto de los mismos.

NOVENO: Que analizando los medios de prueba rendidos por la partes, al tenor de lo previsto en el artículo 456 del Código del trabajo, esto es de conformidad a las reglas de la lógica, conocimientos técnicos, científicos y máximas de la experiencia, resulta suficiente para tener por acreditados los siguientes hechos:

Que cuando el demandante sufrió el accidente con 31 de mayo de 2016, se encontraba desempeñando funciones en la sede de la UTEM ubicada en calle Coronel Pantoja 128, comuna de Santiago. Se estableció que concurrió al lugar el trabajador Jaime Ceballos Godoy enviado por otro funcionario individualizado como Héctor Vega; y el actor don Jorge Inostroza acompañó al primero de los nombrados para mostrarle el lugar donde quedaba la techumbre que debía repararse.

El accidente consistió en una caída en altura al pisar el actor una plancha de fibra de vidrio que cedió cayendo este al suelo desde una altura aproximada de seis metros, accidente que le provocó diversas lesiones: politraumatismo grave, fractura de pelvis, fractura de húmero derecho, fracturas costales y transversas lumbares bajas y trauma abdominal cerrado, todo lo cual está acreditado con la documental de la demandante, particularmente, Epicrisis Hospitalaria del actor en la Mutual de Seguridad e Informe Médico del demandante emanado de la Mutual de Seguridad con fecha 31 de julio de 2019, además de la resolución de Incapacidad Permanente Ley 16.744 N° 20190479 de fecha 28 de marzo de 2019.

Que en orden a determinar la causa basal o determinante del accidente laboral antes referido, se tendrá presente el informe de Investigación del accidente realizado por el comité paritario de higiene y seguridad el cual se reunió en reunión extraordinaria el día 7 de junio de 2016 y el subcomité de investigación de accidentes en conjunto con el prevencionista de riesgo donde se exponen los datos recabados sobre el accidente de Don Jorge Araya Inostroza. Se indica que declararon Samuel Sánchez, Don Héctor Vega, don Javier Ceballos, don Francisco Paredes; doña Delfina González y el trabajador accidentado, se incorporan imágenes del sitio del suceso. En este documento se indica que los integrantes del referido comité concordaron en los siguientes puntos: 1) que no existe un reglamento interno de higiene y seguridad que informe sobre las medidas que



deben tener en cuenta los funcionarios en el desempeño de sus labores; 2) que no se dispone de manuales de Procedimientos que guíen las acciones a seguir en caso de procesos complejos y o inseguros; 3) que la acción realizada por el Señor Jorge no obstante no haber sido en el cumplimiento de una orden directa, fue con el objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura por lo que puede ser considerada con ocasión del trabajo; 4) sin perjuicio de lo anterior se dice que el accionar del Señor Jorge Araya obedece a un espíritu servicial, proactivo y de colaboración permanente. Por lo anteriormente expuesto el comité paritario concluye que el accidente del funcionario no se debió a negligencia inexcusable.

Asimismo, se ha incorporado un sumario sanitario donde el Seremi de Salud de la Región Metropolitana constató incumplimientos en materia de Higiene y Seguridad respecto del accidente del demandante por parte de la Universidad, como no contar con procedimiento de trabajo seguro para mantención de techumbres; no contar con registro de capacitaciones del proceso antes señalado a los trabajadores que realizan estas labores; falta de control por parte de la Universidad, por existir lugares de acceso a techumbre abiertos para el ingreso de cualquier persona; Falta de supervisión directa al momento de realizar la tarea, al no advertir los riesgos a los cuales el trabajador se encontraba expuesto al momento de subir a techumbre sin ningún elemento de protección personal y por un lugar habilitado. Se impuso a la Universidad una multa de 80 Unidades Tributarias Mensuales, según se aprecia en resolución exenta N° 122 de fecha 17 de enero de 2017.

La demandada respecto de este procedimiento aduce que no había acceso libre a la techumbre, por cuando aparece de la documental por ella aportada y en las declaraciones de los testigos que para ingresar al sector se debía abrir con una llave, por tanto no estaba accesible para cualquier persona. Sin embargo aunque ello sea así, no se desvirtúan los incumplimientos señalados ni tampoco contribuye a afirmar que la demandada tenía mecanismos adecuados de fiscalización y procedimiento de trabajo seguro, entre otras circunstancias ya expresadas precedentemente.

Por lo demás, se efectuó una fiscalización por la Inspección del Trabajo, cuyo informe de exposición señala que la causa principal del episodio sufrido por el actor es la falta de conocimiento sobre prevención de riesgos e inducción al respecto, y se afirma que la empresa no le dio a conocer algún reglamento interno, donde se contuviesen aspectos básicos sobre los riesgos del lugar de trabajo, agregándose que no se realiza inducción dándole a conocer al trabajador los riesgos insertos en su labor.

Ha quedado acreditado que la Universidad no mantenía un Reglamento interno de orden higiene y seguridad y el que se exhibió en el juicio es posterior a la fecha del accidente, esto es de 06 de junio de 2016, y además, no existe constancia de su entrega al actor. En consecuencia, poco aporta ese antecedente para establecer que existían medidas de resguardo implementadas y que



el trabajador tenía claro conocimiento de los riesgos existentes en el desempeño de su cargo. De conformidad a ello, se hará además efectivo el apercibimiento legal solicitado por la demandante previsto en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, dándose por probadas las alegaciones que en este aspecto ha efectuado el actor.

La demandada alega que la acción desempeñada por el actor, subirse al techo el día de los hechos, no era parte de las tareas asignadas de acuerdo a su cargo. Al efecto presenta documentos que dan cuenta que el demandante tiene la calidad de funcionario público y presta servicios en la Universidad Tecnológica Metropolitana desde el 01 de septiembre de 1982 Metropolitana, da cuenta que crearon las plantas y un proceso de encasillamiento conforme al Estatuto Administrativo. El demandante Jorge Araya fue encasillado en la planta administrativa mediante Decreto 383 de 1997, que se adjunta, que indica que posee cargo administrativo grado 18 indicándose que a la “Función de Mayordomo y Portería: Les corresponde realizar labores de coordinación, supervisión y control de un sector físico determinado, cautelando su resguardo y mantenimiento” (Decreto 105 de 1996).

Se incorpora además por la demandada la Resolución Exenta N° 02715 de 2013, que indica que don Jorge Araya es destinado a cumplir funciones desde departamento de sistemas y servicios de informática y computación al departamento de humanidades.

A este documento se adjunta un memorando N° 172 de 9 de julio del 2013, donde se señala que el director departamento de humanidades indica que por razones de buen servicio reitera una solicitud en relación a la pronta implementación del edificio de inglés refiriendo que días atrás se habría producido un sobrecalentamiento que estuvo a punto de generar un incendio y por lo anterior solicita contratar a la brevedad al Señor Jorge Araya Inostroza como encargado de laboratorio de inglés. A esa información se suma un correo electrónico donde se solicita reiterar la solicitud de nombramiento del actor como encargado del laboratorio de inglés indicándose que si él no hubiese estado presente el laboratorio se habría quemado.

La documentación antes referida da cuenta de que el actor gozaba de la confianza de sus superiores, manteniendo un fuerte compromiso con la institución y realizando tareas que excedían tal vez sus funciones habituales. Con todo la descripción del cargo ya reseñada precedentemente: “realizar labores de coordinación, supervisión y control de un sector físico determinado, cautelando su resguardo y mantenimiento” que es bastante genérica, no es incompatible con el colaborar en los trabajos que debían efectuarse en un techo mostrando al trabajador asignado el lugar donde existían goteras que debían ser materia de la reparación. Así, resulta del todo atendible la versión del demandante en orden a que realizaba diversas funciones y actividades con el objeto de mantener adecuadamente las dependencias del laboratorio de inglés, resolviendo cualquier problema que existiese con la mantención de los equipos, de los implementos a utilizar, entre otros. El propio comité paritario señala de que el hecho de que el actor haya realizado la conducta que



culminó en el lamentable accidente se debió a su carácter servicial y de colaboración que siempre mantuvo con la institución. Cabe indicar además, que se ha logrado acreditar por la demandante, que jamás se establecieron límites prístinos en las tareas y actividades correspondientes al cargo del actor y los riesgos asociados a ellas. Se encontraba a cargo del laboratorio y no se ha logrado establecer si había una adecuada supervisión y control de parte de la Jefatura, muy por el contrario.

La testigo Natalia Santana Carmona señala que don Jorge era auxiliar de laboratorio, reconoce que no había reglamento interno de higiene y seguridad y que no existía una descripción de funciones específicas, por lo que se concluyó que el accidente no era culpa inexcusable del trabajador, además expresa que posteriormente se formalizó un reglamento interno de higiene y seguridad y otras cosas.

En mérito de todo lo expuesto y razonado, no puede estimarse que el accidente haya sido producto de una exposición imprudente al riesgo por parte del trabajador y considerando las diversas falencias en orden a los procedimientos de trabajo seguro que fueron objetos de Sendas fiscalizaciones y multas para la Universidad, difícilmente el tribunal puede acoger la versión de la parte demandada.

DECIMO: EL artículo 184 del Código del Trabajo, señala en su inciso primero “*El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.*”. Sobre esto, la norma del artículo 69 de la ley 16.744, señala que en estos procesos indemnizatorios debe la víctima reclamar indemnizaciones con arreglo a las prescripciones del derecho común, esto es, el derecho civil.

La responsabilidad del empleador por los accidentes del trabajo que afecten a sus dependientes es la responsabilidad denominada contractual, puesto que, en estos casos, el hecho dañoso se produce precisamente por el incumplimiento por parte del empleador de un deber legal que se incorpora a todo contrato de trabajo: el deber de seguridad que reconoce el artículo 184 ya citado. Asimismo, se ha entendido por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que el empleador en estos casos responde y se le aplica un estándar de diligencia que se aviene con el de la culpa levísima, siendo esta mayor culpa una contrapartida a los deberes de lealtad y fidelidad que se exigen correlativamente al trabajador.

En este caso, el trabajador realizó una actividad riesgosa, sin contar con implementos adecuados para ello y sin contar el empleador con una suficiente supervisión, inducción respecto de trabajo seguro, sin mantener un reglamento de higiene y seguridad, como ya se ha analizado en el considerando anterior. Dado el incumplimiento del deber de protección por parte del empleador, hay elementos suficientes para afirmar la responsabilidad el accidentes sufrido por el trabajador.



No es atendible el argumento de la demandada en orden a que el actor se expuso imprudentemente al daño al trabajar omitiendo las medidas de seguridad, realizando una actividad que no correspondía a sus funciones, las cuales como ya se ha señalado no estaban delimitadas de manera específica y detallada y por cuanto es deber del empleador velar por la seguridad de sus trabajadores.

En ese sentido corresponde acceder la solicitud de establecer una indemnización por daño moral, como señalará a continuación.

UNDECIMO: Que el daño moral, se puede entender como el sufrimiento, dolor o aflicción psicológica que lesiona el espíritu, afecta la vida de una persona y se manifiesta en pesadumbre y depresiones de ánimo, permite a este Tribunal desprender de los antecedentes acompañados, en especial atenciones médicas recibidas, la declaración de su cónyuge y el hijo del actor, quienes dan cuenta que el accidente y tratamiento médico realizado provocaron cambios en su ánimo, lo cual fue consecuencia directa del accidente laboral. Así, el demandante sufrió un daño o detrimento en sus derechos e intereses extra patrimoniales de gozar de integridad y normalidad física y psíquica, de tener el mismo estado de salud que poseía antes del accidente, todo lo cual constituye un perjuicio configurativo de daño moral que debe ser indemnizado.

Las lesiones sufridas por el actor con motivo del accidente del trabajo materia de este proceso, le ha provocado secuelas de proporciones, una incapacidad de un 80 %, tuvo que someterse a diversos procedimientos médicos y cirugía, mantiene dolores crónicos físicos y presenta problemas de carácter psicológico y elementos que permiten afirmar stress post traumático. Ello es corroborado con el atestado del perito Juan Omar Quintana Navea quien señala que evaluó en tres ocasiones al demandante Jorge Araya Inostroza quien tiene indicadores de grave daño psicológico, hubo cambios en su personalidad y en su funcionamiento. A ello se añade que presenta una incapacidad permanente según ya se ha referido

Con todo, la cuantía de los daños y perjuicios debe medirse por el perjuicio sufrido; y considerando la magnitud de la culpa cometida por el empleador. En este caso, conforme al informe relativo a la discapacidad sufrida por el actor y secuelas permanentes sufridas; esta sentenciadora va a avaluar el daño moral experimentado por el actor, en la suma de \$125.000.000, monto que se considera adecuado para paliar al menos en parte el sufrimiento que ha tenido que soportar y sobrellevar el demandante.

No hay otra prueba que permita modificar lo razonado precedentemente y alterar las conclusiones antes señaladas.

DUODECIMO: Que entendiendo que la parte demandada tuvo motivo plausible para litigar, no será condenada en costas.



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 9, 183, 184, 420, 425, 445, 453, 454, 459, del Código del Trabajo; 4, 66, 66 bis 69 y 76 de la ley 16.744, **SE DECLARA:**

I. **SE ACOGE**, la demanda por indemnización de perjuicios por accidente del trabajo interpuesta por don Jorge Araya Inostroza en contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, representada por don Nicolás del Solar Duarte, quienes deberán pagar al actor la **suma de \$125.000.000 (ciento veinticinco millones de pesos)**; por concepto de indemnización por daño moral.

II. Que la cantidad ordenada pagar deberá ser reajustada de conformidad a la variación que experimente el IPC entre la fecha en que quede ejecutoriada la presente sentencia, y la del pago efectivo, con intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero reajustables a contar de la fecha en que los deudores se constituyan en mora.

III. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia por correo electrónico, fecha desde la cual se contabilizarán los plazos para recurrir.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, regístrese y archívese.

RIT : O-6790-2019
RUC 19-4-0221977-K

Dictada por **VERONICA SEPULVEDA BRIONES**. Juez Titular (D) del Primer Tribunal de Letras del Trabajo de Santiago.



A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>